

nal, y los Comandos de Ex Cadetes, del agente de la CIA Federico Willoughby McDonald. Este general Carrasco, estrechamente ligado al Servicio de Inteligencia Militar, en relación directa con el Pentágono⁶ (su relación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es tan grande, que en diciembre de 1973, la Junta Militar lo designó jefe de la Misión Militar en la Embajada de Chile en Washington, para tener «al hombre preciso en el lugar correcto», arriesgando dejar la Tercera División en manos de un general sumamente inepto, como es Agustín Toro).⁷ Además el general Washington Carrasco Fernández tenía relaciones directas con la oligarquía chilena a través del senador nacional Francisco Bulnes Sanfuentes, empresario monopolista y socio del consorcio norteamericano WR Grace. El general Carrasco formaba parte de los «reformistas».

Por su parte, el comandante en jefe de la División de Caballería, general de brigada Héctor Bravo Muñoz, protegía los adiestramientos que los latifundistas de la provincia de Valdivia hacían para afrontar el creciente movimiento campesino de liberación, que exigía más tierras y la expropiación de los latifundios, sin pago alguno para los empresarios de la tierra y considerando en esa expropiación toda la maquinaria y las instalaciones de las haciendas. El general Bravo Muñoz estaba ligado estrechamente al Pentágono de los EEUU a través del general Mario Sepúlveda Squella, que fuera comandante de la Segunda División del Ejército y de la guarnición de Santiago hasta el 24 de agosto de 1973, fecha en que renunció al conocer los planes para asesinar al Presidente Allende simulando un suicidio (lo mismo ocurrió con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares hasta ese mismo día en que renunció por las mismas razones). Bravo Muñoz era ultracatólico, como Manuel Torres de la Cruz, y formaba parte del grupo de los generales «constitucionalistas» encabezados aparentemente por Carlos Prats González.

Ultimo mensaje

Cuando el 21 de mayo de 1973, el presidente Allende leyó ante el nuevo Congreso Nacional, elegido el 4 de marzo, su mensaje anual a la nación, la situación era explosiva desde todos los ángulos posibles. El costo de la vida había tenido un alza, en los últimos doce meses, de 195,5 %. El día 16 de mayo, los stocks

de combustibles líquidos (gasolina y parafina) se habían agotado, y el gas licuado estaba en serios problemas de abastecimiento. A tal punto, que el Gobierno mexicano despachó a Chile un buque tanque velozmente, para salvar las necesidades de combustible de la entrada del invierno en Chile, a petición desesperada de Salvador Allende.

Había realmente un descalabro económico mayúsculo, producto del sabotaje sistemático del capital monopolista en manos privadas chilenas y yanquis, y del imperialismo de los EEUU, durante los tres años del Gobierno elegido en septiembre de 1970. Sólo como referencia, daremos algunos antecedentes.

«Las líneas de crédito de la banca norteamericana comenzaron a disminuir inmediatamente. De 219 millones de dólares que tenían otorgados en líneas de crédito en agosto de 1970 bajaron rápidamente a 32 millones al promediar 1971. Lo propio aconteció con los organismos bancarios internacionales y las instituciones financieras de Estados Unidos. El ministro Orlando Millas, en su exposición del estado de la Hacienda Pública, señaló que entre 1964 y 1970 Chile contrató en el BID, el BIRF, AID y el EXIMBANK créditos por 1.031 millones 806 mil dólares, lo que hacía un promedio anual cercano a los 150 millones de dólares. En 1971 este volumen disminuyó a 40 millones de dólares y se ha reducido a CERO en el curso de 1972 (Hugo Fazio: *El Bloqueo Financiero*, «Revista de la Universidad Técnica del Estado», enero-febrero de 1973).»

«Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Estado, dijo en Nueva York que “en cuanto a la caída de los préstamos externos e inversiones en Chile no parece necesario buscar ninguna razón exótica”. Bray manifestó que la moratoria unilateral de Allende en los pagos de la deuda externa adoptada el año pasado “ha dañado seriamente el crédito de Chile” (Cable de la agencia United Press International, de 6 de diciembre de 1972).»

«Cuando estos contactos sean llevados a cabo (el *memorandum* escrito al presidente de la ITT, el 20 de octubre de 1970, se refiere al doctor Henry Kissinger, mister Meyer y mister Irwin, del Departamento de Estado, al secretario William Rogers y al presidente Nixon), nosotros exigiremos que los representantes norteamericanos de los bancos internacionales tomen una acción decidida en contra de cualquier petición de préstamos de los países que expropian compañías norteamericanas o ejerzan acciones negativas contra el capital privado extranjero. Y, como parte de nuestra acción total, debemos pedir a nuestros amigos

del Congreso que alerten a la Administración norteamericana, avisándoles que de continuar un tratamiento inadecuado del capital privado norteamericano, esto traerá como consecuencia una reducción de los fondos de los contribuyentes norteamericanos en los bancos internacionales. (Parte de los documentos de la ITT, dados a conocer por el periodista yanqui Jack Anderson).»

«La Kennecott Cooper está tratando de lanzar un bloqueo internacional legal a los embarques de cobre chileno... La batalla en el Tribunal de París no podría haberse producido en un momento peor para Chile, que obtiene alrededor de un 70 % de sus divisas de la venta del cobre... Este país ya está hirviendo con la inquietud política y social y se está balanceando al borde de la bancarrota. Obviamente la ofensiva de la Kennecott perjudicará posiblemente las futuras ventas de cobre a los clientes que no desean arriesgar disputas legales y posiblemente atrasos costosos en las entregas.

»Los ejecutivos de la Kennecott están decididos a mantener esta situación candente sobre Chile. La oficina de Manhattan del Consejero General, Pierce McCreary, que está dirigiendo la campaña, tiene el aspecto de una sala de guerra. Su escritorio está sembrado de informes de embarques y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar las rutas de los barcos.

»Desde aquí, McCreary mantiene una estrecha vigilancia sobre los barcos que entran o salen del puerto chileno de San Antonio, el único lugar desde donde se embarca el cobre de El Teniente. Actualmente está observando los movimientos de por lo menos seis barcos que se dirigen a Europa cargados con el metal de El Teniente; cuando lleguen enviará a sus agentes allí para recibirles con órdenes judiciales (Revista "Time", del 6 de noviembre de 1972).» Por supuesto, la revista «Time» no podía agregar en su crónica que a la Kennecott en Nueva York le llegaban los informes de los zarpes de los barcos con cobre desde San Antonio, vía marina de los Estados Unidos, a través de los mensajes provenientes de la Primera Zona Naval de Valparaíso, bajo el mando del vicealmirante José Toribio Merino. Es decir, el espionaje para la Kennecott se efectuaba en un puerto chileno, por medio de ¡oficiales traidores a su patria en Chile!... El vicealmirante Merino es hoy día uno de los «salvadores de la Patria», como miembro de la Junta Militar. Este hecho fue denunciado por «El Rebelde» (Santiago, octubre 1972).

«...después de la decisión tomada por la mayoría de los organismos internacionales de crédito de cesar todas sus actividades

en favor de Chile, la ofensiva sobre el cobre, conducida con el apoyo tácito del Gobierno norteamericano y lanzada por la Democracia Cristiana, se unen en una misma y vasta operación que tiende literalmente a estrangular la experiencia emprendida después de octubre de 1970 por el presidente Allende ("Tribuna", de Lausana, del 17 de octubre de 1972.)»

Pero no era solamente el bloqueo financiero imperialista de los Estados Unidos (bloqueo solamente contra la economía global chilena, pero dejando a salvo el financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, que en el mismo período recibieron préstamos norteamericanos cuantiosos, incluso para comprar un avión Hércules C-130, para 90 paracaidistas, con su equipo completo, por valor de 5 millones de dólares, y varias naves de guerra menores y equipamiento liviano para «lucha contra subversión interna,⁸ y el sabotaje sistemático de los monopolios chilenos los que habían descalabrado a tal punto la economía del país. Se sumaba a ello la falta de flexibilidad del sistema financiero internacional que, incluso con los préstamos de la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, impedía zafarse de los efectos destructivos del cierre de los préstamos norteamericanos. Se sumaba también un notable porcentaje de incapacidad de los mandos medios en el aparato económico de la Unidad Popular, incluyendo (aunque en número muy minoritario) casos de corrupción administrativa y de desvíos de dinero hacia el financiamiento de cajas electorales y de pago de funcionarios de algunos partidos políticos. Sin embargo, en una relación cuantificada de las causas de la cuasi bancarrota económica del país en el primer trimestre de 1973, el porcentaje de la inepticia y la corrupción de miembros responsables de la Unidad Popular es mínimo, comparado con el sabotaje sistemático, brutal y sumamente despiadado de los monopolistas privados chilenos y norteamericanos. Incluso más, se podría afirmar científicamente que aun en el caso de que no hubiera habido ni inepticia ni corrupción en algunos sectores de la Unidad Popular, el descalabro económico habría sido tan significativo como era en ese momento.

En todo caso, la situación se podía resumir con algunos aspectos como éstos:

a) Por primera vez en la historia de la gran minería del cobre chileno, el mineral de Chuquicamata no tuvo utilidades en 1972, y acusó una pérdida cercana a los 5 millones de dólares. La falta de repuestos y su reemplazo a tiempo, por el cierre del mercado norteamericano, fue la causa principal.

b) En 1972, la enorme industria textil Sumar, estatizada en 1971, arrojó pérdidas por 132 millones de escudos (unos 11 millones de dólares).

c) La Corporación del Cobre informa que la mina de cobre de Chuquicamata tuvo una baja de producción de 15000 toneladas en 1972 en comparación con 1971. El mineral de cobre de La Exótica marca una baja de 4000 toneladas en el mismo período, y el mineral de El Salvador una disminución de 2000 toneladas.

d) El balance al 30 de junio de 1972, señala para la Distribuidora Nacional (DINA) del sector estatal, una pérdida de 20 millones de escudos y un endeudamiento con el sistema tributario y de seguro social del Gobierno de 172 millones de escudos.

e) La Compañía Chilena de Electricidad (que fue comprada por el Gobierno de Frei a la American Foreign Power de los EE.UU. en 1970, por 186 millones de dólares, teniendo instalaciones que valían sólo 18 millones de dólares), acusa en 1972 una pérdida de 250 millones de escudos.

f) En mayo de 1973, el ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, declara a los periodistas que como resultado del bloqueo externo, han dejado de funcionar la mitad de las grúas de un sector del puerto de Valparaíso. Por la misma causa de falta de repuestos, hay 250 locomotoras de la Empresa de Ferrocarriles del Estado paralizadas, de un total de 500 locomotoras que posee la empresa.

Ninguno de los efectos relatados brevemente más arriba podrían haber sido evitados sustancialmente desde el punto de vista económico, ya que tenían su origen en una presión constante (sobre una economía capitalista dependiente del imperialismo norteamericano) de las fuerzas monopólicas privadas chilenas y extranjeras, con una meta bien precisa: provocar el descalabro del aparato productivo para obligar a los trabajadores, azotados por la miseria consecuente, a quitarle su apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, y dejarlo a merced del esquema de derrocamiento. Y no podrían ser evitadas porque el programa político, económico y social de los dirigentes de la Unidad Popular no era socialista, no estaba dirigido por los trabajadores y se había metido en una batalla por el poder económico dentro de las propias leyes de funcionamiento del capitalismo monopólico dependiente del imperialismo, dejando así en manos de la oligarquía y los consorcios transnacionales la mayor capacidad de maniobra. Un ejemplo de la debilidad extrema de la posición meramente desarrollista, y no socialista, de todo el programa de

Gobierno de la Unidad Popular, lo da el estrangulamiento externo considerando sólo cuatro factores: el bloqueo financiero, el cambio en el precio mundial del cobre, el aumento de los precios mundiales de los alimentos y la presión interna por importar más alimentos.

Los efectos combinados de estos cuatro factores significa que para los años 1971 y 1972, el país perdió MIL CIENTO CINCO MILLONES DE DÓLARES. El bloqueo financiero significó la necesidad de remitir al exterior 200 millones de dólares por concepto de movimiento de capitales; la baja del precio del cobre, de 64 centavos la libra en 1970, a 49 centavos en el 71 y el 72, lo que costó al presupuesto nacional una menor entrada de 460 millones de dólares en esos años; el alza de los precios mundiales del trigo en un 51 %, la mantequilla en un 88 %; la carne congelada en un 40 % y el azúcar en un 86 % (precios del mercado de Nueva York), acumuló un mayor gasto de 275 millones de dólares en el bienio; y el aumento en volumen de las importaciones de trigo (300 mil toneladas en 1970 contra más de 500 mil toneladas en 1971) y de leche descremada (3.800 toneladas en 1970 contra 38.400 toneladas en 1971) significó un aumento de los gastos de 50 millones de dólares para 1971 y de 120 millones de dólares para 1972.

Si a esto sumamos que, para 1973, el Gobierno debía pagar 493 millones de dólares por concepto de amortizaciones e intereses de la deuda externa (duplicada en el período de Eduardo Frei y aumentada en casi mil millones de dólares por Allende a causa de la nacionalización de las minas de cobre, hierro, salitre y expropiación de algunas industrias norteamericanas), tenemos un cuadro de debilidad extrema en el sector externo, causada precisamente por lo contrario que argumentaban quienes planificaban el derrocamiento de Allende. Es decir, por no ser un programa económico ni político socialista el del Gobierno de la Unidad Popular, sino el de un reformismo desarrollista profundo.

La medida exacta del problema externo lo da el hecho de que el TOTAL de los ingresos en divisas de Chile, anualmente, no supera los 1.200 millones de dólares.

Esto quería decir que por el bloqueo externo, manejo de los precios mundiales por el imperialismo norteamericano, pago obligado de una deuda externa hipertrofiada y la importación de alimentos indispensables, el Gobierno se veía obligado a gastar 1046 millones de dólares anuales, lo que dejaba disponibles para

importación de maquinarias, repuestos, combustibles y materias primas industriales la escuálida suma de menos de 150 millones de dólares anuales. Eso, naturalmente, produjo una paralización gravísima del aparato productivo nacional, metiendo a su economía en una espiral inflacionista gigantesca.

Ahora bien, si a esto agregamos el sabotaje interno de los aliados chilenos de los consorcios multinacionales como la ITT, Anaconda, Kennecott y bancos como el Chase Manhattan y el First National City, el cuadro se completa. Dos datos para la comprensión:

1) Solamente en 1972, los grupos monopólicos chilenos desplazaron más de 100 millones de dólares desde la reinversión a la especulación, y dejaron de reinvertir capitales en el aparato productivo privado (más del 60 % del total nacional) en un orden del 54 %.

2) La mayoría política al servicio de los intereses norteamericanos y oligárquicos chilenos en el Parlamento, solamente aprobó durante el año 1972 veinte proyectos de leyes que significaban un mayor gasto de 60.000 millones de escudos con un financiamiento de sólo 12.000 millones de escudos. ¡Es decir, obligó al Gobierno a emitir billetes sin respaldo productivo, por este solo concepto, por la enorme suma de casi 4000 millones de dólares! ¡Cerca de la mitad del producto nacional bruto! Con esto, además, se impidió que los empresarios monopólicos privados chilenos y extranjeros ayudaran al financiamiento de la economía nacional por medio de mayores tributaciones, trasladando la carga económica a los hombros de los obreros, campesinos, empleados y empresarios pequeños y medios, los que pagaban principalmente los efectos inflacionarios de estas gigantescas emisiones de billetes sin respaldo.

Sin embargo, todo este cuadro de tragedia económica provocado por la conspiración monopólica chilena-norteamericana para crear las condiciones «objetivas» del derrocamiento de Allende, había tenido una respuesta no calculada por los conspiradores. A medida que el caos económico se agravaba quedaba más claro el sabotaje de las fuerzas reaccionarias, y las organizaciones populares, al margen de las directivas de los propios partidos de la Unidad Popular, habían ido transformando lo que se bautizó como «poder popular para aumentar la producción» (discursos de Allende y directivas públicas del Partido Comunista de Chile en 1970, 1971, 1972 y 1973), en un esbozo de «poder popular para hacer la revolución». Ya en mayo de 1973 estaba

claro tanto para los directivos de la Unidad Popular como para los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas y sus líderes ideológicos en el Pentágono, así como para los dirigentes de la oligarquía nacional, que había en el seno de la clase obrera, de los campesinos y los empleados un movimiento «independiente» que, sacando experiencia de los años 1971 y 1972, había llegado a conclusiones bien claras sobre cómo salir de la crisis económica, política y social en que estaba sumida la democracia burguesa chilena.

Grandes sectores del partido socialista, incluyendo a su secretario general Carlos Altamirano; el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), llegaron a la conclusión de que la tesis del Partido Comunista de Chile y del propio Salvador Allende englobaba en el concepto de la «vía chilena hacia el socialismo» y basada en la subjetiva idealización de un supuesto «tránsito pacífico al socialismo», había entrado en bancarrota. Que incluso constituía un freno a la revolución chilena por ser un factor de debilidad, ante las conciliaciones con los monopolios privados chilenos y norteamericanos, y un enorme peligro de que todo el aparato reformista semiconstruido por Salvador Allende fuera destruido, junto con la democracia burguesa, para dar paso al fascismo. Y que, por eso mismo, el pueblo chileno se hallaba ante una coyuntura histórica en la que: o tomaba el camino de prepararse para destruir «las fuerzas de reserva estratégica del imperialismo y de la oligarquía en Chile: sus Fuerzas Armadas» y para expropiar todo el poder económico y político de la oligarquía y el imperialismo en Chile, o serían atacados por una contrarrevolución armada que implantaría el fascismo. Esto hizo que estos sectores de la Unidad Popular se sumaran a las tesis sustentadas desde muchos años antes por grupos de izquierda revolucionaria como el Partido Comunista Revolucionario, pero sin haber logrado dar forma, hasta ese instante, a una táctica adecuada para las condiciones chilenas.

Como una manera de evitar que el pueblo tuviera que afrontar una contrarrevolución armada inerte, esos grupos políticos trataron durante todo el año 1973 (hasta septiembre) de impulsar la movilización de miles de obreros y campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo al Gobierno avanzar en el proceso de expropiaciones, exigiendo control de los trabajadores en las industrias y empresas del área social, exigiendo que los funcionarios ineptos y corrompidos, los burócratas y los dirigentes sindi-

cales reformistas fueran sacados de sus cargos y reemplazados por auténticos representantes de los obreros, campesinos y empleados; exigiendo la aplicación drástica de las propias leyes burguesas contra los saboteadores de la economía nacional, y por último, planteando la necesidad de una enorme movilización a nivel masivo, en constante actitud de vigilancia y de combate que neutralizara el complot fascista de las Fuerzas Armadas por el tiempo suficiente para lograr una organización obrera armada capaz de oponerse a los intentos del Pentágono y de los altos mandos chilenos por colocar a Chile en el yugo de los grandes consorcios yanquis dócilmente.

Infortunadamente, toda esta movilización se vio entrabada, perseguida e incluso denunciada por los propios dirigentes políticos cercanos a Salvador Allende y del Partido Comunista de Chile, y cuando los militares en contacto con el Pentágono dieron la señal de partida para la destrucción de la democracia burguesa el 11 de septiembre de 1973, no había todavía una preparación adecuada de defensa, ni armas en manos del pueblo, ni un criterio uniforme para asumir la defensa de la democracia contra el ataque fascista.

Sin embargo, todo este fenómeno de «emergencia política» de grandes sectores del pueblo chileno, era lo que había hecho decir al Pentágono, en su «informe de octubre», que «la insurrección popular estaba en el punto de despegue» en Chile y que era necesario impedirle que «despegara», para lo cual ordenó a los generales chilenos servidores del imperialismo norteamericano que derrocaran a Allende «lo más pronto posible» y en «el momento más adecuado» para impedir un enfrentamiento «dudoso» con ese naciente «poder popular» al margen del manejo que hasta ahora habían hecho de él el presidente Allende y sus apoyos políticos como el Partido Comunista de Chile.»

El 21 de mayo de 1973, en su Mensaje al nuevo Parlamento chileno, el presidente Salvador Allende, que sabía tan bien como el que más que «el nuevo poder popular» se le escapaba de las manos, trató de utilizar ese «fantasma que recorre Chile» para asustar a la oligarquía y convencerla de que le diera tiempo para «encauzar» las inquietudes populares e impedir que se transformaran en una revolución cabal.

De manera dramática, el presidente Allende fue exponiendo ese día su «petición de mayor plazo» a los enemigos políticos que habían decidido derrocarlo porque «ya no es capaz de impedir la insurrección popular». Dijo: «El dinamismo de un pro-

